

LAS HUELLAS DEL DESARROLLO

**Intersecciones entre conflicto,
reconfiguración social
y pacificación en Colombia**

Juan Carlos Sánchez Sierra
Catalina Acosta Oidor
Editores



Las huellas del desarrollo

Intersecciones entre conflicto,
reconfiguración social
y pacificación en Colombia

Las huellas del desarrollo

Intersecciones entre conflicto,
reconfiguración social y
pacificación en Colombia

Juan Carlos Sánchez Sierra
Catalina Acosta Oidor

EDITORES



Mahecha Laiton, Alejandra

Las huellas del desarrollo: Intersecciones entre conflicto, reconfiguración social y pacificación en Colombia / Alejandra Mahecha Laiton [y otros diecinueve autores], editores Juan Carlos Sánchez Sierra y Catalina Acosta Oidor, Bogotá: Universidad Santo Tomás, 2019.

441 páginas; mapas, ilustraciones y tablas

Incluye referencias bibliográficas

ISBN: 978-958-782-220-5

E-ISBN: 978-958-782-221-2

1. Conflictos ambientales - Colombia 2. Conservación del medioambiente - Colombia 3. Explotación petrolera - Colombia 4. Mujeres víctimas de la violencia - 5. Violencia - Aspectos sociales - Colombia I. Universidad Santo Tomás (Colombia).

CDD 303.62

CO-BoUST



© Juan Carlos Sánchez Sierra y Catalina Acosta Oidor, editores

© Alejandra Mahecha Laiton, Ana María Púa Olivo, Fanny Elizabeth Ortiz Ruiz, Catalina Quiroga Manrique, Adriana Sofía Simbaqueba Tolosa, Angie Bermúdez Naranjo, Nicole Ruiz Navarro, Diego Alejandro Ballén Velásquez, Juan Carlos Sánchez Sierra, Paola Alejandra Botero Sandoval, Suad Yusseth Fonseca Molina, Luis Carlos Cuervo Urrea, Claudia Varela Valero, Eider Alexánder Barreto Higueta, Yenifer Beltrán Sierra, Luisa Fernanda Ramírez Gamboa, Catalina Acosta Oidor, Stefan Ortiz, Raúl Iván Clavijo Mejía, Laura Daniela Ballén Vargas y María Victoria Giraldo Macea

© Universidad Santo Tomás

Ediciones USTA

Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: (+571) 587 8797, ext. 2991

editorial@usantotomas.edu.co

<http://ediciones.usta.edu.co>

Corrección de estilo: Henry Colmenares Melgarejo

Diagramación: Martha Cadena

Diseño de carátula: Juliana Pardo Torres

Imagen de carátula: mina en el municipio de Puerto Libertador, Córdoba (Colombia).

Recuperado de <https://bit.ly/2Y5S0DO>

Impresión: DGP EDITORES S.A.S.

Conversión a ePub

Mákina Editorial

<https://makinaeditorial.com/>

Hecho el depósito que establece la ley

ISBN: 978-958-782-220-5

E-ISBN: 978-958-782-221-2

Primera edición, 2019

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio, sin la autorización expresa del titular de los derechos.

Contenido

PRÓLOGO

MIGUEL URRRA CANALES

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO, CAMBIO POLÍTICO Y COYUNTURA ECONÓMICA: LA TRANSICIÓN HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA HABANA EN COLOMBIA 2016-2018

PARTE I

DESARROLLO Y CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES: LOS PROCESOS DE DESCOMPOSICIÓN Y ALTERNATIVAS DE RECONFIGURACIÓN SOCIAL

UN ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN Y LAS INSTITUCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO EXTRACTIVISTA MINERO EN COLOMBIA

ALEJANDRA MAHECHA LAITON

ANA MARÍA PÚA OLIVO

FANNY ELIZABETH ORTIZ RUIZ

UNA APUESTA LOCAL POR LO COMÚN: ENTRE LA ILEGALIDAD Y LA LEGALIDAD DE LA MINERÍA EN PEQUEÑA ESCALA EN COLOMBIA

CATALINA QUIROGA MANRIQUE

EXPLORACIÓN PETROLERA Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES: EL CASO DE LA PROVINCIA DE SUGAMUXI 2009-2015

ANGIE BERMÚDEZ NARANJO

NICOLE RUIZ NAVARRO

ADRIANA SOFÍA SIMBAQUEBA TOLOSA

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL: EL CASO DEL PROYECTO
HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO (HUILA)

DIEGO ALEJANDRO BALLÉN VELÁSQUEZ

LA VORÁGINE EXTRACTIVISTA Y LAS NARRATIVAS DE *REALITIES* PRESENTADOS EN LA
TELEVISIÓN EN COLOMBIA (*GOLD RUSH*, 2010)

JUAN CARLOS SÁNCHEZ SIERRA

PARTE II

LÍMITES Y REALIDADES DE LA PACIFICACIÓN SIN DESARROLLO: MOVILIZACIÓN Y ALTERNATIVAS SOCIALES

LA INCLUSIÓN INDÍGENA: FACTOR DIFERENCIADOR EN EL DISCURSO DEL DESARROLLO EN
COLOMBIA Y ECUADOR

PAOLA ALEJANDRA BOTERO SANDOVAL

SUAD YUSSETH FONSECA MOLINA

MUJER, CONFLICTO Y TERRITORIO: MUJERES VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FRENTE A LA
RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN EL META

LUIS CARLOS CUERVO URREA

CLAUDIA VARELA VALERO

EMPODERAMIENTO COLECTIVO: LAS VOCES DE LAS MUJERES DE LA RED DE MUJERES Y
ORGANIZACIONES DEL META

EIDER ALEXÁNDER BARRETO HIGUITA

ANÁLISIS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE REINTEGRACIÓN EN BUCARAMANGA

YENIFER BELTRÁN SIERRA

LUISA FERNANDA RAMÍREZ GAMBOA

PARTE III

PROCESO DE PAZ Y ACUERDO. LÍMITES Y REALIDADES DE LA PACIFICACIÓN DE CARA AL DESARROLLO

LA REINVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA COMO DESAFÍO PARA LA PACIFICACIÓN:
EL CASO DE LAS BACRIM

CATALINA ACOSTA OIDOR

TRANSFORMACIONES TERRITORIALES E INVERSIONES MASIVAS EN TIERRAS: UN MARCO DE ANÁLISIS A PARTIR DEL CASO DE LA ALTILLANURA COLOMBIANA

STEFAN ORTIZ

APROXIMACIÓN AL PROBLEMA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN COLOMBIA: DE LA NEGOCIACIÓN EN LA MESA DE LA HABANA AL MEDIOARIARI

RAÚL IVÁN CLAVIJO MEJÍA

MARÍA VICTORIA GIRALDO MACEA

LAURA DANIELA BALLÉN VARGAS

CONCLUSIONES

SOBRE LOS EDITORES

Índice de ilustraciones, mapas y tablas

- Ilustración 1. Componentes de la *minería de lo común*
- Ilustración 2. Caricatura del campesino boyacense
- Ilustración 3. Localización general del PHEQ
- Ilustración 4. Localización de las obras de presa y obras anexas
- Ilustración 5. Diagrama de las categorías analíticas
- Ilustración 6. Percepción del bienestar antes del desplazamiento
- Ilustración 7. Percepción del bienestar durante el desplazamiento
- Ilustración 8. Percepción del bienestar frente al retorno
- Ilustración 9. Determinación frente al retorno
- Ilustración 10. Empoderamiento en el nivel colectivo
- Ilustración 11. Presencia de bandas criminales en Colombia durante el año 2011
- Ilustración 12. Presencia de actores armados, 2012
- Ilustración 13. Paisaje de la zona ganadera de Montería, Córdoba
- Ilustración 14. Paisaje del resguardo Wacoyo en Puerto Gaitán, Meta
- Ilustración 15. Explotación agroindustrial de arroz vecina a las tierras sikuanis
- Ilustración 16. Cantidad de hectáreas de propiedades y porcentaje de propietarios entre 1960 y 2009

Ilustración 17. Principales países exportadores de palma de aceite en 2013

Ilustración 18. Regiones productoras de palma de aceite en Colombia

Ilustración 19. Presencia de grupos armados ilegales en el país

Mapa 1. División municipal de la provincia de Sugamuxi

Mapa 2. División provincial del departamento de Boyacá

Mapa 3. Licencia actual del área de interés exploratorio muisca por parte de la empresa M&P. Señalización del área que la empresa solicitó ampliar para exploración petrolera

Mapa 4. Hidrogeología en la provincia de Sugamuxi. Unidades de roca o suelo que almacenan agua en volúmenes suficientes para permitir su explotación

Mapa 5. Municipios del Meta y zonas de desplazamiento referidas en la investigación

Mapa 6. Mapa de tierras de la ANH en la Orinoquía

Mapa 7. Índice de Gini en la región orinocense

Mapa 8. Presencia de paramilitares y convenciones para explotación de recursos naturales

Mapa 9. Mapa de títulos y solicitudes mineras en Colombia

Tabla 1. Resumen de los conceptos del Glosario Técnico Minero

Tabla 2. Tipologías de poder aplicadas al empoderamiento

Tabla 3. Indicadores de medición del empoderamiento

Tabla 4. Pobreza, pobreza extrema y Gini por áreas 2014-2015

Tabla 5. Porcentaje de áreas praderizadas para ganadería contrastadas con el porcentaje de áreas de los municipios

Tabla 6. Áreas sembradas de palma aceitera en el Meta en el 2014

Tabla 7. Cantidad de hectáreas de reservas forestales en Colombia

Prólogo

Una de las acepciones de la palabra *huella* habla de la señal que deja el ser humano en la tierra por donde pasa. Entendiendo la tierra como el territorio, en esta obra el lector encontrará un análisis de las marcas que deja un paradigma de desarrollo económico, que no tiene en cuenta el bien común y solo prioriza la creación de una supuesta riqueza: afectaciones al medioambiente, violación de derechos humanos, ataques a la población y violencias. La mejora de las condiciones materiales de vida y de los indicadores económicos es una meta legítima, pero, como se recoge en estas páginas, no al precio de pasar por encima del equilibrio socioambiental; no a costa del medioambiente y de las personas.

Quizás, sin darnos cuenta de la magnitud de la tarea, estamos ante los grandes retos y problemas del sigl XXI. El extractivismo, los megaproyectos frente a las técnicas artesanales, la dependencia del petróleo, las nuevas fuentes de energía renovables, el respeto y reconocimiento de las culturas indígenas, el empoderamiento de la mujer en las regiones, las políticas de construcción de paz y reconciliación, las nuevas violencias o la tenencia de la tierra son los ejemplos que abordan los autores.

Los casos y hechos que se recogen en este libro nos deben llevar a dos caminos: una reflexión profunda sobre lo que ha pasado y está pasando en las regiones colombianas

y, también, a líneas de acción a futuro para no tropezar dos veces con la misma piedra y poner en riesgo lo conseguido en el proceso de paz. De esta manera, se espera que estas páginas sean un grano de arena en la construcción y consolidación de un nuevo paradigma de desarrollo humano, social, sostenible, incluyente, con enfoque territorial, pacífico, cooperativo, justo, redistributivo y que tenga como eje el bien común y la dignidad de las personas. Esto puede sonar utópico, pero, al leer estos capítulos, no encontraremos otra cosa que realidades, buenas o malas; ahora le corresponde al lector comprometerse a replicar las mejores y a trabajar porque las peores no se vuelvan a repetir.

Miguel Urra Canales
Decano de la Facultad de Sociología
Universidad Santo Tomás
Bogotá, D. C., 9 de noviembre de 2018

Introducción

Desarrollo, cambio político y coyuntura económica: la transición hacia la implementación de los acuerdos de La Habana en Colombia 2016-2018

En lo corrido del siglo XXI, Latinoamérica ha experimentado un renovado giro económico hacia la explotación de materias primas entre las que los hidrocarburos, los minerales y la agroindustria para la exportación constituyen un componente fundamental para alcanzar cifras indicadoras de desarrollo. Tras décadas de impulso a la industrialización y el fortalecimiento de rubros económicos como el de los servicios, desde la última década por lo menos, la región padece una vez más los efectos históricamente demostrados de la imposición de una mirada del desarrollo que se corresponde con las bonanzas propiciadas por ese privilegio que se le da al crecimiento económico por la vía de la dependencia y el estancamiento de sectores productivos, con sus correspondientes efectos sociales y ambientales. Como sucedió en el pasado, al proceso se le han dado nombres asociados al colonialismo, a la dependencia y a la ambición especulativa; hoy se le tilda de neoextractivismo,

economías de escala, todos denominadores útiles para abordar las distintas dimensiones que adoptan los ciclos económicos.

A lo largo del siglo XXI esto ha significado el recrudecimiento de variados efectos que resultan de esa inclinación por la obtención de divisas por las vías del monocultivo para la agroexportación, el acelerado crecimiento de economías de enclave que limitan las dinámicas locales a las veleidades del mercado de *commodities*, y la sobredimensión a la inversión extranjera directa como componente del producto interno bruto en la definición de la macroeconomía en los países que entraron en la cintura del ajuste estructural desde la década de 1980. El diagnóstico pareciera empeñarse en asociar los ciclos económicos con las burbujas de prosperidad que han ocurrido en otros tiempos en los Países Bajos: la *enfermedad holandesa*¹ de hoy no es muy distinta a la *fiebre de los tulipanes*² de ayer, cuando en el siglo XVII el afán especulativo arruinó uno de los focos más prósperos del entonces naciente capitalismo.

Entre los efectos adversos se pueden contar las perturbaciones sociales a nivel local, con impactos negativos en materia productiva, de empleo, el ascenso de prácticas delictivas que a menudo superan la imaginación, y la orientación de varias generaciones de jóvenes a proclamar una ruptura y la adopción de la mentalidad del dinero fácil y el enriquecimiento ilícito en abierto desdén por la vida rural o comunitaria. También se pueden incluir entre los efectos del desarrollo económico la reanimación de viejos conflictos socioeconómicos ya no comprensibles dentro de parámetros ideológicos o de clase —funcionales en otra época—, pues en su lugar imperan lógicas de acumulación que combinan lo legal y lo ilegal, casi siempre con la anuencia o ausencia del aparato estatal. La

sostenibilidad del sistema de acumulación —llámese extractivismo, rentismo, neocolonialismo— fue impulsado en el discurso del desarrollo basado en la premisa de buscar un crecimiento sostenido, y se mantiene así aun cuando las ciencias naturales y sociales han demostrado que tal proceso es imposible de mantener en el tiempo sin ocasionar un colapso general, que en términos biológicos es similar al efecto del cáncer y la metástasis. La consolidación de ese silencio frente al sentido común ha llevado a negar las perturbaciones económicas que han recaído sobre las poblaciones directamente afectadas por las lógicas de explotación económica contemporáneas. Ese juego de tramoyas, de negar el mal y denunciarlo o diagnosticarlo solo cuando afecta a los jugadores centrales de la economía global, acarrea el descrédito o minimización del impacto en materia social y ambiental de la explotación acelerada de minerales, hidrocarburos o productos exóticos que deben arrebatarle a los pocos reductos donde la naturaleza se mantuvo relativamente prístina a pesar de siglos de saqueo.

El hecho de que los conflictos no perturben las sociedades latinoamericanas en cuantiosas sumas de sangre, como fue costumbre a lo largo del siglo xx, no significa que haya dejado un saldo social positivo luego de la bonanza pasajera; en ese caso, Colombia se distingue por presentar cuantiosas cifras en términos de víctimas asociadas a estos tipos de explotación. La limitación de la violencia directa en el plano productivo responde tanto a una dimensión renovada del capitalismo, en la que la intervención extranjera es impulsada por agentes privados corporativos y facilitada por los Gobiernos con un pulso discreto, pero siempre presente, así como a la capacidad de que los intereses productivos interfieran con el interés por el lucro. La política se ha modernizado en Latinoamérica,

algo que parece probar la ciencia política al examinar la oleada de democratización reciente en la región, pero los espejismos democráticos resultan desiguales a la hora de medir la forma como han consolidado marcos jurídicos e instituciones gubernamentales fuertes, que supervisen el cumplimiento de normas básicas para la sostenibilidad y legalidad de la explotación de recursos.

Esa comunión entre capital y política, que tiene un rostro más sutil ahora que en los siglos XIX y XX, no significa que sea menos insidiosa. Esto se puede entender en un examen de las transformaciones mismas del vínculo político en las distintas estructuras del Estado en Latinoamérica, donde los linajes que controlan el régimen político son los que cuentan con la riqueza que el poder les facilita. Las burguesías latinoamericanas entablaron un vínculo con el tejido financiero y de organismos multilaterales durante las décadas de 1960 y 1970, una relación que articulaba los circuitos financieros con los nodos principales para la definición de la geopolítica global. En la época de la globalización, la participación de organismos internacionales para dirimir disputas y denunciar excesos en materia de conflictos, derechos humanos y sobreexplotación, son los mismos que alimentan versiones del discurso del desarrollo como iniciativas para transformar las dinámicas productivas y reconocer mercados y fuentes de recursos inexplorados. Las instituciones que denuncian las atrocidades de la pobreza y la sobreexplotación han sido desde la segunda posguerra las mismas que facilitan otros discursos como el de los derechos humanos, la cautela medioambiental y, como por una vuelta del destino, son las mismas que coadyuvan a doblar el brazo de las naciones que no permiten intrusiones a su soberanía. En otras palabras, la escena de la explotación de recursos en el ámbito internacional se

entronca con las instancias institucionales que se crearon a lo largo del proceso de globalización, en tanto han otorgado garantía de legitimidad, supervisión, judicialización y justificación moral y ambiental para que el impulso de la explotación capitalista parezca menos oneroso de lo que en realidad resulta.

La precariedad económica de los países latinoamericanos ha obligado a los Gobiernos a adoptar rumbos productivos, que terminan por generar daños a futuro que no compensan los frutos de la bonanza; también las decisiones se toman en el despertar de ambiciones que llevan a desorientar las premisas gubernamentales del bien común. En contextos como el colombiano, donde hay conflicto armado, cultivos ilícitos y eterna pugna social por la titulación y aprovechamiento de tierras, lo ambiental pasa con mayor rapidez a un segundo plano. Los procesos de sufragio y renovación constitucional han alentado, contrario a lo esperado, una crisis generalizada de credibilidad institucional, en medio de un acelerado proceso de explotación de recursos, desigualdad en la distribución del ingreso y desorden político de los actores sociales. En Colombia, a la exportación de productos agrícolas se le suman los cultivos de coca, amapola y marihuana, y desde hace dos décadas se le acompaña de la presión legal e ilegal asociada con la minería y la extracción de hidrocarburos como sectores que impulsaron la bonanza económica durante la primera década del siglo XXI. Estos fenómenos no se corresponden, por ejemplo, con una efectiva implementación de las premisas del discurso del desarrollo: democratización del acceso a la tierra para que sea el mercado el que se encargue de su asignación y uso, formación técnica y profesional para impulsar las fuerzas productivas en su conjunto, y modernización institucional para hacer efectivo al Estado allí donde le

corresponde cumplir las funciones que el mercado le asigna.

Desde la década de 1950, cuando los Estados Unidos implementaron la planificación para el desarrollo a través de la Alianza para el Progreso, las clases dominantes se han resistido a las reformas requeridas para que la economía florezca según las proyecciones teóricas que inspiran el ajuste hacia la democratización capitalista. El efecto ha sido un avance en la inequidad, el deterioro de la legitimidad del Estado porque asigna ventajas en un contexto donde debería preservar la competencia, la desconfianza social por cuenta de una creciente explotación y, finalmente, el beneficio para minorías encumbradas en el Estado por la administración y la gestión pública que realizan en beneficio propio. Pero esto no solo ocurre en Colombia, casi por regla es la tragedia de las periferias animando su perpetua dependencia. Los flujos de capital circulan entre los intereses políticos también, lo que significa que la institucionalidad del Estado ha sido capturada por los actores económicos, a menudo armados, y así el conjuro del saqueo de recursos naturales se hace a través de la colusión, el clientelismo y ejemplos sistemáticos de corrupción y desfalco al erario.

Fenómenos recientes como el descubrimiento de esquemas empresariales que han permitido ocultar bajo la reserva informativa financiera en Panamá, los *Panama Papers*, y la alianza público-privada que Odebrecht orquestó para convertirse en un mecanismo político con tentáculos electorales en cada país por la vía de la contratación de obras de infraestructura privada y pública, dejan ver cómo la ilusión del desarrollo, el buen vivir, la preservación de los derechos humanos o la libre expresión de los periodistas son ilusiones discursivas ante las enormes riquezas que están en juego. En ambos casos, los

denunciantes han visto cómo la verdad se vuelca en su contra, esto sin profundizar en el hecho de que algunos de ellos han muerto de forma violenta, y, luego de años del vuelco de los regímenes políticos latinoamericanos, estos han caído uno tras otro bajo la égida conservadora que fomenta esta concepción del Estado y la prosperidad económica. La legislación minera, solo para mencionar un ejemplo, ofrece casos de esta dinámica, tanto en la esfera local como en la cúspide gubernamental y corporativa, lo que instauró la práctica de la *puerta giratoria* como la demostración de la simultaneidad de intereses, de cara a la opinión pública.

Ante este panorama, resulta necesario acercarse al conocimiento detallado de cuáles son las formas como se establecen en los territorios los mecanismos con los que se busca generar el crecimiento económico entendido como la única forma del desarrollo nacional. El estudio de casos concretos y las lógicas locales de interacción entre el Estado, los actores sociales y económico permite reconocer el impacto social y ambiental que dichos mecanismos generan en las poblaciones y, por ende, cómo estas responden a los conflictos socioambientales que interfieren en su cotidianidad. En otras palabras, en este libro se busca identificar particularidades para el caso colombiano de la implementación del desarrollo como modelo de planificación, como discurso funcional para las estrategias de acumulación y segmentación social, de transformación territorial, y hasta qué punto determina la configuración legislativa la organización de los actores sociales en sus demandas para contrarrestar los efectos del desarrollo mismo, y el particular legado del acomodamiento de las fuerzas productivas a las particularidades de la globalización en la época de reconfiguración del ajuste estructural en Colombia.

El contexto regional e internacional también resulta inquietante a la hora de balancear el contenido y propósito de este libro. Entre los años 2015 y 2017, los autores desarrollaron las investigaciones incluidas, antesala al evento *Huellas del desarrollo. Intersecciones entre conflicto, reconfiguración social y paz en Colombia*, realizado el 24 de abril del 2017, en el que se hicieron converger con el auspicio de las universidades Santo Tomás y de La Salle. Aunque inicialmente estas investigaciones respondían a las inquietudes que despertaban la caída de los precios de productos primarios, y en particular de minerales e hidrocarburos, el mundo presenciaba el auge en la construcción de megaobras de infraestructura que definieron en buena medida las agendas de política económica de los países periféricos. Esta convergencia — apenas hoy empezamos a reconocerlo— significó el destape de prácticas de vieja data en los procesos de contratación y asignación territorial que realizan los Estados en favor de corporaciones privadas, que a menudo combinan inversiones en minería e infraestructura, y que los distintos Gobiernos de Latinoamérica orientaron a satisfacer requerimientos en la demanda de energía eléctrica, agua, mano de obra no calificada, así como la prospección territorial para evitar incomodar los intereses del gran capital internacional ante demandas por temas de los efectos que tales obras tienen en el orden comunitario y de sostenibilidad medioambiental.

Si bien en sus inicios el libro buscaba contextualizar las inquietudes que hay frente a la noción de desarrollo, la realidad del país desbordó rápidamente ese propósito. No solo se empieza a sentir en Colombia el efecto de las decisiones comunitarias que intentan bloquear proyectos de minería de gran escala e infraestructura pese a la ambigüedad del Estado que oscila entre seguir la voluntad

popular o privilegiar los intereses de corporaciones multinacionales. También, la democracia del país significó un reto como resultado de un referendo que dejó en entredicho el proceso de negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —en adelante Farc—, los acuerdos alcanzados y las posibilidades de construir una paz duradera, sumado a la paradójica negativa *formal* en las urnas de cara a limitar el efecto de la corrupción y el detrimento patrimonial de la nación por intereses políticos. Esto demuestra cómo la fuerza de las oposiciones políticas instrumentalizan la acción política de la ciudadanía a pesar de la significativa transformación de la manera como nos informamos y adoptamos una posición política frente a los problemas reales de nuestra sociedad; también, el viraje de buena parte de los regímenes políticos del planeta, del centro y centro-izquierda hacia la derecha, responde a un proceso de fortalecimiento de los mecanismos políticos usados por los emporios económicos, sin que la población pueda revertir muchas decisiones que adoptan amplias mayorías desinformadas, intimidadas, o que observan en los neopopulismos una posibilidad de ver resueltos sus temores y angustias. Si algo nos deja esta lección es que vivimos una época dinámica y contradictoria, que parece cuestionar los marcos de análisis usados para entender e interpretar la realidad contemporánea.

Este libro reúne investigaciones que se preocupan por los efectos del desarrollo en una retrospectiva de mediano plazo. Sin embargo, esa realidad que interpretan se ubica en el escenario político relacionado con el Acuerdo de Paz de la administración de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las Farc, y la difícil fase de implementación que se inicia bajo el Gobierno de Iván Duque Márquez, quien, en representación del partido Centro Democrático, no reconoce dicha negociación y viene arrojando dudas sobre

los elementos propios del acuerdo, así como el marco jurídico bajo el cual se debe implementar en un ejercicio de justicia transicional. En ese propósito, resulta importante analizar las limitaciones de la pacificación con relación a la mirada de desarrollo imperante, que propende por mecanismos depredadores tanto de la naturaleza como de las comunidades residentes en los territorios vistos como fuentes de desarrollo por cuenta de la presencia de recursos energéticos. Estas limitaciones tienen que ver precisamente con los móviles del conflicto armado, identificados por las partes negociadoras, principalmente con relación al problema de la distribución de la tierra en Colombia, de ahí que resulte ser este un tema central para la comprensión de las posibilidades de desarrollo del país. Aunado a ello, es importante evidenciar la continuidad del accionar de actores armados que se presuponían desmovilizados y que persisten en su dinámica de funcionamiento, justamente por cuenta de dichas lógicas de acumulación de capital que benefician a determinados sectores en detrimento de las comunidades locales.

Como un intento por avanzar en la solución de estos interrogantes, el presente libro reúne resultados de investigación que ofrecen elementos de discusión desde tres perspectivas principales. En primer lugar, las facetas del desarrollo en su renovado impulso de comienzos del siglo XXI, cuando la estructura democrática del país ha terminado por legitimar el extractivismo, en tanto involucra a las poblaciones por la vía del sufragio —consultas populares— y actualiza los marcos constitucionales o jurídicos, mismos que han dado libre tránsito a intereses desbordados en los procesos de bonanza minero-energética y agroindustrial. En segundo lugar, se examinan los confines de la participación social no tanto como un resultado de la renovación constitucional de 1991 y su efecto

en las instituciones que orienta, sino en las formas de organización alternativa que resultan del padecimiento de los efectos de un desarrollo desordenado, una constante marginalización de la población en medio de la abundancia de recursos y la inclusión participativa de nuevos actores sociales impulsados por el descontento y la organización por fuera de los canales políticos tradicionales. Finalmente, de cara a la constante de violencia en Colombia, se ofrecen perspectivas sobre fenómenos como la continuidad del accionar armado de actores que se suponían oficialmente acabados y también respecto a la distribución de la tierra, factores centrales para las posibilidades de implementación del acuerdo de pacificación recientemente alcanzado por el Gobierno con la guerrilla de las Farc, en aras de reconocer las limitaciones existentes en materia de política pública y supervisión institucional y las dificultades de un desarrollo real a lo largo del territorio nacional.

En la experiencia colombiana, el desarrollo ha estado condicionado, además, por la presencia constante del conflicto político armado. La violencia, y en particular aquella que tiene un carácter político, fue una variable determinante durante las diferentes administraciones de gobierno por más de medio siglo; lo que significó una disminución en el presupuesto destinado a los bienes requeridos para garantizar el bienestar de la población colombiana: salud, vivienda, educación, alimentación, trabajo, cultura, investigación, etc. El recorte en estos diferentes sectores tenía como propósito concentrar la inversión en la lucha contra las guerrillas, presentadas como el actor principal del conflicto con el Estado, pese a la existencia de otros varios actores que complejizan el escenario de la guerra, tales como el paramilitarismo y los ejércitos al servicio exclusivo de los carteles de la droga. De esta manera, se hizo posible consolidar

progresivamente las políticas de seguridad, materializadas en el gasto en el sector defensa, es decir, en salarios a miembros del cuerpo militar y policial, armamento, equipamientos, tecnología e incentivos para la desmovilización.

Sin lugar a dudas, las administraciones que más fortalecieron el incremento y modernización del pie de fuerza en el ámbito nacional corresponden a los períodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2014). No en vano fueron quienes dieron los más duros golpes a la guerrilla de las Farc³, lo que es leído en ocasiones como un factor que presionó a esta para que decidiera aceptar una negociación de paz a la que asistimos durante la anterior administración de Juan Manuel Santos, y que se encuentra hoy en su fase de implementación, pese a que el Gobierno actual no reconozca dicho acuerdo y privilegie el exterminio de esta última por vía de la fuerza. No obstante, es innegable que el bienestar de la población colombiana pasa por la terminación de la guerra, para así enfocar la agenda pública hacia la administración de todo el conjunto de bienes necesarios para la reproducción de la sociedad, lo que posibilita avanzar en la tarea de la modernización del Estado colombiano, es decir, en la consolidación de un Estado de derecho.

Resulta fácil la justificación de este argumento, al considerar la ausencia de enfrentamientos entre las Farc y las Fuerzas Armadas, pero también, por el camino de la desaparición de las acciones bélicas que caracterizaban el repertorio de acción de este actor: muertes, secuestros, extorsiones, atentados contra la infraestructura y estaciones de Policía, etc., y sumado a ello, de las consecuencias indirectas por cuenta del terror que se instauraba en los territorios donde tenía lugar el conflicto,

como por ejemplo el desplazamiento forzado de población. Sin embargo, este último fenómeno producto de la guerra no se encuentra vinculado únicamente al conflicto con las guerrillas. Aunque fue uno de los argumentos para justificar la necesidad del fortalecimiento del pie de fuerza y la confrontación armada, la verdad es que el desplazamiento resulta de la expropiación de tierras, una constante histórica en Colombia —que podría considerarse un catalizador del surgimiento de agrupaciones subversivas—, impulsada por terratenientes, comerciantes, militares, jefes políticos locales y mafiosos, quienes se hicieron con el control territorial de vastas zonas de Colombia, donde encontraron posibilidades de acumulación de capital por cuenta de la explotación de los recursos naturales —hidrocarburos y minerales⁴—, cultivos agroindustriales y cultivos ilícitos. Además, este fenómeno se enfatiza producto de la mencionada renovación del capitalismo en la que la intervención extranjera es impulsada por agentes privados con el beneplácito del Estado, un fenómeno que sugiere la correspondencia entre capital y política de manera explícita.

En esta labor jugó un papel determinante la conformación de ejércitos privados de “autodefensa” que se encargaron del ejercicio eficaz de la violencia como mecanismo de dominación, lo que dio como resultado la acumulación de tierras en pocas manos y el incremento de población campesina arrojada a las ciudades donde se reduce su existencia a la supervivencia bajo situaciones precarias. Precisamente, la magnitud de esta problemática y su importancia como condición del conflicto político histórico en el país se reflejan en la priorización otorgada en el *Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera*(2016), a través del primer punto denominado “Hacia un Nuevo Campo

Colombiano: Reforma Rural Integral”, en el que se busca, por una parte, fortalecer las condiciones del campesinado en Colombia para garantizar su existencia como un actor económico en el desarrollo del país; pero también, posibilitar el acceso a la tierra y la restitución, mecanismo para revertir los efectos del conflicto a través del retorno de las víctimas del desplazamiento forzado a sus tierras.

Tal como fue acordado, esta iniciativa vislumbraba un futuro esperanzador para el país. No obstante, el contexto colombiano va más allá de un conflicto directo entre una guerrilla y las Fuerzas Militares del Estado, los únicos actores implicados en dicho Acuerdo de Paz, razón por la que la implementación de esta reforma es todo un reto. Además de otras guerrillas, algunas facciones de las Farc —como por ejemplo el Frente Primero que tiene como zona de influencia el departamento del Guaviare— no se acogieron al proceso de paz, por el cálculo entre los beneficios que les proporciona la guerra y las desventajas de la incorporación a la vida civil, en tanto ahora pueden mantener el control de los territorios, para lo cual se establecen alianzas con bandas criminales y organizaciones delincuenciales, en pro de la obtención de las rentas derivadas de la explotación de los recursos presentes en el subsuelo y de los cultivos ilícitos, lo que en últimas se hace posible a través de alianzas establecidas con políticos locales. Además, la falta de claridad en cuanto a la implementación del acuerdo en sus diferentes puntos y las garantías para la desmovilización, principalmente por el Gobierno de Iván Duque que, bajo la influencia del senador Álvaro Uribe, no reconoce y pone trabas a la implementación de lo acordado, inciden de manera determinante en el fenómeno de las escisiones.

Adicionalmente, otros actores armados aparecen para copar los espacios dejados por la guerrilla de las Farc,

haciéndose al control territorial con miras a la explotación de la abundante oferta de recursos que tienen las diferentes regiones en Colombia. Se trata de otras guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional —en adelante ELN—, pero principalmente de agrupaciones paramilitares o bandas criminales, delincuentes organizados no identificados, y la fuerza pública.

Como resultado de este nuevo panorama, desde la firma de los Acuerdos de Paz en septiembre del año 2016 se agudizó el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Según informe del Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores de Derechos Humanos —en adelante SIADDDH— (2017), hasta junio del año 2017, se habían registrado 82 asesinatos de defensores de derechos humanos a manos de estos actores armados; mientras la Defensoría del Pueblo registró 133 asesinatos perpetrados en 2016 y 126 en 2017, para un total de 259. Una de las principales motivaciones de dichos homicidios responde a la reclamación de tierras y a la defensa de los recursos naturales⁵ amenazados por las prácticas de explotación en las que se basa el modelo de crecimiento económico en Colombia, que ha otorgado multiplicidad de títulos mineros a multinacionales extranjeras, incluso en zonas prohibidas para actividades extractivas —páramos, fuentes de agua o comunidades protegidas—; desaparición y contaminación de aguas y aire; proyectos madereros que incrementaron la deforestación; proyectos agroindustriales que deterioran la tierra y disminuyen la biodiversidad; reducción de recursos para la gestión ambiental, y, en algunos casos, el redireccionamiento de las regalías al cubrimiento del déficit fiscal.

Según Global Witness (2016), en el caso colombiano, el proceso de paz es un factor que probablemente incidió en